



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 5371/2024 AML

Autos: “PUERTO DE ORIGEN S.R.L. c/ AFIP - DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 5371/2024

Buenos Aires,

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución RESOL-2023-2182-E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS, por la que no se hace lugar a la impugnación presentada por la contribuyente **PUERTO DE ORIGEN S.R.L., C.U.I.T. Nº 33- 1411166-9**, de fecha 07/04/2021, dirigida contra el ajuste determinado en la Orden de Intervención Nº 1.777.774, por los períodos 05/2014 a 12/2018, **CONFIRMAR la DEUDA** en concepto de omisión de aportes y contribuciones a la seguridad social por las sumas de \$ 7.962.412,20.-, en concepto de capital, y \$ 11.243.293,05.- en concepto de intereses calculados al 11/03/2021, y **SUSPENDER la APLICACIÓN de la MULTA**, por la falta de denuncia de trabajadores y/o incumplimiento de la retención de aportes, en los términos del artículo 15, inciso b), de la Ley Nº 17.250, y del artículo 5º, segundo párrafo, de la Resolución General Nº 1566 (AFIP), texto sustituido en 2010, y sus modificatorias, por la suma de \$ 15.924.824,40.-.

II- Así, se le notificó a la contribuyente de lo resuelto, informándole que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada.

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora optó por recurrir a esta instancia judicial, sin dar cumplimiento con el requisito del pago previo establecido por el art. 15 de la ley 18.820.

III.- Así las cosas, corresponde analizar en primer término, si corresponde eximir a la recurrente del principio solve et repete exigido por la normativa precedentemente citada. A tal fin, la recurrente ofrece seguro de caución Nº 183372 emitida a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por la firma INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. en garantía como sustitución de pago previo de la obligación depósito previsto en el art. 15 de la Ley 18.820, ad 12 de la Ley 21.864 (modificada por la Ley 23.659) y art. 26 de la Ley 24.463.

Compartiendo lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A”(dictamen de la Fiscalía Nº 2, de fecha 22/12/93, nº 4935/93) y lo



resuelto por este Tribunal en los mismos autos, mediante sentencia de fecha 14/4/94, n°57859/94 y en autos “ Tronchet Pour L Home S.A c/ DGI s/ Impugnación de deuda”, sentencia n° 77225 del 12/06/95 , y por la Sala II del fuero en autos “Club Atlético Vélez Sársfield Asociación Civil c/ DGI , sent. 72.655 del 18.12.98 y por la Sala III en autos “Creaciones Ginesse SAIC c/ DGI”, sent. 68.448 del 17.5.98, el depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido.

En ese contexto, este tribunal entiende que la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas en las actas en cuestión, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta por el art. 15 de la ley 18.820 y artículo 26 de la ley 24.463, ya que está suficientemente garantizada la obligación.

En sentido análogo se han pronunciado las tres Salas que integran el fuero, entre otras, así como la Sala II en autos “COMPAÑÍA DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 114.039, la Sala III en autos “TREVES ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 110.602, y esta Sala I en autos “FRIGORÍFICO GORINA S.A.I.C. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 124.944.

Ello así, corresponde tener por cumplido el requisito exigido por el art. 15 de la ley 18.820, mod. por art. 26 de la ley 24.463 y entrar a considerar el fondo de la cuestión.

IV.- La recurrente argumenta que la actividad principal de PUERTO DE ORIGEN S.R.L consiste en la prestación de servicios inmobiliarios a cambio de una retribución o por contrato. En el marco de la inspección, la autoridad fiscal notificó a la parte actora el Acta N° 0980002021005720802 mediante la que intimó a la Compañía a que presente declaraciones juradas de los Recursos de la Seguridad Social por los períodos fiscales 05/2014 al 12/2018, en concepto de aportes y contribuciones, ingresando las diferencias resultantes.

Afirma que el acta en cuestión estaba compuesta por diferencias emergentes de aportes y contribuciones de los recursos de la Seguridad Social por considerar, a criterio del Fisco, que los agentes inmobiliarios que se vinculan comercialmente con la compañía en forma independiente, eran sus empleados.

Asimismo, considera que el criterio fiscal no se ajusta a derecho, explicando la relación comercial que la une a los agentes inmobiliarios (contrato de agencia) y los errores en la “interpretación” del fisco sobre la relación laboral encubierta.

Advierte que a partir de la prueba ofrecida y producida a lo largo de la contienda, no existe otra opción que desestimar aquellas afirmaciones de la autoridad fiscal nacional respecto de la existencia, en ese caso, que bajo la modalidad del contrato de agencia se lo coloque al margen de la legalidad, que exista subordinación jurídica o técnica .





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

De igual manera, cuestiona que la autoridad fiscal desestime el planteo de nulidad oportunamente planteado respecto de la falta de motivación de las actas de inspección que dieran origen a la presente discusión.

Se queja que la AFIP insista en la pretensión bajo el argumento de la existencia de una relación laboral regida por la Ley de Contrato de Trabajo, entre los denominados agentes inmobiliarios y la empresa.

Finalmente, expresa que los agentes se encuentran vinculados a través de contratos de agencia, en los términos de los arts. 1479 a 1502 del CCyC, y en tal sentido poseen exclusividad –pudiendo contratar servicios con terceros– son responsables por los gastos en que incurran y no deben cumplir horario ni carga horaria alguna. No perciben ningún ingreso sino que por el contrario, abonan al franquiciado por el uso de servicios, independientemente de la concreción de operaciones inmobiliarias. En tal sentido, los franquiciados facturan mensualmente los agentes, por el uso de espacio de oficina y/o capacitación vinculada al marketing, promoción y/o publicidad de actividades complementarias a la actividad inmobiliaria.

Comenta que entre los servicios que la empresa presta a los agentes, se encuentran el derecho de utilizar distintivos de la marca del franquiciante, con sujeción a las pautas que el franquiciado determine; brindar un programa de formación en marketing y atención al cliente, otorgar el derecho de utilizar las instalaciones de la oficina de franquiciado, en cualquier momento cuando el agente lo desee y también le otorga el derecho de suscribirse a la base de datos del franquiciante, previo pago de los importes correspondientes.

Finaliza afirmando que de resultar procedente el criterio fiscal, se llegaría al indeseado resultado tributario de que cualquier relación comercial encuadrada válidamente bajo el contrato de agencia pueda ser considerada por la AFIP como un accionar ardidoso por parte de los contribuyentes para ocultar la verdadera intención económica, gravando de esta manera hechos impositivos no contemplados por las leyes tributarias.

Sostiene la improcedencia de los intereses resarcitorios y también la multa dispuesta.

V.- Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el



procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excm. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

VI.- Las presentes actuaciones tienen su origen en el relevamiento de personal, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en el domicilio fiscal del contribuyente PUERTO DE ORIGEN S.RL, sito en la calle Aimé Paine N° 1521, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de ello, en fecha 18/08/2016, la fiscalización actuante inicia la verificación mediante la Orden de Intervención N° 1.495.684.

Entrando a la cuestión a resolver, corresponde señalar en primer término que si bien este Tribunal comparte el valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, en el caso de autos los datos declarados no tienen aptitud para formar convicción respecto de la cuestión, pues en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la justa resolución de la cuestión.

Pues, aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la Administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág 29 y ss).

Ello así, el organismo fiscal no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora ni la documentación aportada.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

La jurisprudencia tiene dicho que hay contrato de agencia cuando una parte (agente) asume de manera estable el cargo de promover, por cuenta de otro (concedente) mediante retribución, desarrollando su actividad con total independencia y autonomía, con sujeción únicamente a las normas contractuales, siendo su gestión unilateral, pues su acción se realiza en favor de una sola de las partes (cfr. C.N.A.Com., Sala A, sent. del 16.02.82, "Pozzo Balbi, Enea c/ Frison Curtiembres S.A.").

El rasgo de autonomía resulta esencial en la tipificación de la figura de la agencia y determina su deslinde respecto de la regulación jurídica de las relaciones de índole laboral, de modo tal que el agente no es un subordinado de su proponente, ya que realiza la actividad encomendada en forma autónoma y a su propio riesgo, sin que a ello obsten las instrucciones a las que suele estar sometidos.

De esta manera, la garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

En este sentido, en los presentes actuados la cuestión se centra en los elementos probatorios ofrecidos por la apelante, y dictar una resolución lo más acorde posible con la realidad de los hechos.

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incls. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos "Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda", sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), ni logra formar opinión acabada sobre el vínculo laboral que el organismo pretende endilgar, corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida ordenando al organismo,

En similar sentido, se ha pronunciado esta Sala en mayoría, con disidencia de la Dra. Pérez Tognola, en los autos "REMADEX S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA", sentencia definitiva dictada el 30/10/2023 en el Expte. N° 30052/2023.

VII.- Atento a como se resuelve la cuestión no corresponde expedirse sobre los restantes agravios esgrimidos por la parte actora.

VIII.- En atención a que el organismo fiscal, no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

La Dra. Victoria Pérez Tognola no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).



Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)- Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2)- Revocar la resolución recurrida de acuerdo a lo expuesto precedentemente; 3) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.

